

# URUGUAY: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2021

## RESUMEN

La República Oriental del Uruguay es una república constitucional con un presidente elegido democráticamente y un parlamento bicameral. En las elecciones nacionales de 2019, Luis Lacalle Pou obtuvo el mandato presidencial de cinco años en elecciones libres y transparentes. Ningún partido político ganó la mayoría parlamentaria, pero el partido de gobierno formó una coalición para aprobar leyes.

En la órbita del Ministerio del Interior, la Policía Nacional mantiene la seguridad interna y la Dirección Nacional de Migraciones es responsable de la migración y el control de fronteras. Las Fuerzas Armadas, en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, son responsables de la seguridad externa y tienen algunas responsabilidades dentro del país, como la guardia del perímetro exterior de seis cárceles y la seguridad fronteriza. Las autoridades civiles mantuvieron efectivamente el control de las fuerzas de seguridad. Hubo denuncias creíbles de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos.

Existieron abusos importantes a los derechos humanos, entre ellos, denuncias creíbles de condiciones duras que pusieron en riesgo la vida de los reclusos en algunas cárceles.

El gobierno tomó medidas para identificar y penalizar a los funcionarios que cometieron abusos a los derechos humanos o participaron en corrupción a nivel oficial; no hubo informes de impunidad. La justicia continuó investigando las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar entre 1973 y 1985. La ley las tipifica como crímenes de lesa humanidad.

## Sección 1. Respeto de la integridad de la persona

### **A. PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA VIDA Y OTRAS EJECUCIONES ILÍCITAS O MOTIVADAS POR CUESTIONES POLÍTICAS**

No hubo denuncias de que el gobierno o sus agentes cometieran ejecuciones arbitrarias o ilícitas.

## **B. DESAPARICIÓN**

No hubo denuncias de desapariciones realizadas por las autoridades gubernamentales o en su nombre.

## **C. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES**

La Constitución y la ley prohíben estas prácticas, y no hubo denuncias de que funcionarios de gobierno las emplearan.

La impunidad de las fuerzas de seguridad no constituyó un problema importante.

### **Condiciones de las cárceles y los centros de detención**

Las condiciones de las cárceles y los centros de detención fueron malas e inhumanas en varias instalaciones debido a hacinamiento, malas condiciones de higiene, atención médica insuficiente, programas socioeducativos inadecuados y altos niveles de violencia entre los reclusos.

**Condiciones físicas:** Al 20 de agosto, la población carcelaria totalizaba 13.815 personas, lo que representaba un 135 % de su capacidad. La situación en cada una de las 27 cárceles era muy diferente: había 8 cárceles que superaban el 100 % de su capacidad, 7 que superaban el 150 % de su capacidad y 2 que superaban el 200 % de su capacidad. El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), informaron que el hacinamiento también afectó sectores de cárceles con una población promedio inferior a la capacidad total. Según el Comisionado Parlamentario y el MNP, las peores condiciones de reclusión se dieron en unidades con altas tasas de superpoblación y de mayor tamaño, donde los reclusos dormían en el piso y tenían menos cantidad de actividades socioeducativas. El Comisionado Parlamentario afirmó que el 33 % de los reclusos sufrieron trato cruel, inhumano o degradante, y que el 56 % de los reclusos no estaban bien preparados para la reinserción social tras su liberación. Estas cifras reflejaron un descenso (de 27 % a 11 %) en el porcentaje de la población carcelaria a la que se ofrecieron oportunidades de rehabilitación y reinserción social en comparación con el año anterior.

La situación de las reclusas mujeres, que representaron un 5 % de la población carcelaria, fue variada. En las cárceles mixtas, las autoridades asignaron a las mujeres a algunas de las peores partes de las cárceles, lo que derivó en dificultades en el acceso a alimentos, espacios privados y visitas con familiares. En un presunto intento por evitar los conflictos entre hombres, los guardias evitaron que las

mujeres usaran el patio de la cárcel, las excluyeron de algunas actividades y les prohibieron usar ropa que se considerara reveladora durante las visitas. Las mujeres no tuvieron acceso regular a servicios de salud sexual y reproductiva de rutina. Las madres que estaban con sus hijos en los centros de reclusión se alojaron en instalaciones mal diseñadas con problemas de seguridad por falta de una clasificación adecuada de las reclusas, problemas sanitarios y ambientales, falta de instalaciones y servicios especializados, y políticas no definidas y poco claras para reclusas con necesidades especiales. En un estudio realizado por la Universidad de la República se concluyó que los niños reclusos con sus madres no tenían acceso a una nutrición adecuada.

El MNP y el Comisionado Parlamentario informaron que hubo niveles altos de violencia institucional e interpersonal en muchas cárceles, particularmente en las instalaciones más grandes. Hasta el mes de agosto, había habido 12 homicidios como consecuencia de la violencia entre reclusos (en comparación con los 17 de 2020), además de 7 suicidios (en comparación con los 9 de 2020). En 2020, la tasa de homicidios en las cárceles fue 14 veces mayor que la de la población en general, mientras que la tasa de suicidios en las cárceles fue 6 veces mayor. En setiembre, las autoridades carcelarias tomaron conocimiento del caso de un recluso que fue secuestrado, torturado y abusado por sus compañeros de celda durante aproximadamente 60 días. Los guardias de la cárcel no detectaron la situación durante sus revisiones semanales de las celdas de ese módulo. Las autoridades carcelarias solo descubrieron el abuso tras la liberación del líder de la celda donde estaba secuestrado el recluso y la víctima fue trasladada a otra celda, donde los reclusos denunciaron lo que había sucedido. Posteriormente, las autoridades denunciaron la situación ante la Fiscalía. Los exámenes médicos revelaron signos de abuso físico y sexual, así como una grave desnutrición. Las autoridades carcelarias iniciaron una investigación administrativa y removieron al director de la cárcel de su cargo.

La falta de personal y de elementos básicos de control, como cámaras de seguridad, hizo que la prevención, el control y la aclaración de hechos en los incidentes de seguridad fueran difíciles. La falta de personal carcelario para transportar y acompañar de manera segura a los reclusos afectó la posibilidad de que los reclusos participaran en talleres, clases, deportes y actividades relacionadas con el trabajo.

Ciertas cárceles tuvieron falta de higiene, acceso insuficiente al agua, alimentos insuficientes o de mala calidad, y muy pocas actividades socioeducativas y laborales. Los reclusos a veces pasaron 23 horas del día en sus celdas, y muchos permanecieron en sus celdas durante semanas o incluso meses. Los reclusos en

ocasiones estuvieron expuestos a riesgos eléctricos, sanitarios y de otros tipos por la mala infraestructura.

En sus informes anuales, el Comisionado Parlamentario y el MNP informaron que hubo una falta de atención médica en las cárceles o dificultad para acceder a ella. Los servicios médicos no siempre incluyeron servicios de salud preventiva y atención médica de rutina. La falta de personal carcelario limitó la posibilidad de que los reclusos tuvieran consultas médicas fuera de las cárceles. Los reclusos fueron transferidos a nuevas cárceles sin sus registros médicos ni recetas médicas. Los servicios de salud mental, así como los servicios de rehabilitación por consumo de sustancias, no estuvieron disponibles de manera adecuada para la población que requería atención, seguimiento y tratamiento. Las demoras administrativas en ocasiones afectaron la entrega de medicamentos.

En mayo, el fallecimiento repentino e inexplicable de un recluso de 20 años con discapacidad intelectual que estaba detenido en una de las cárceles más grandes y pobladas llevó al Comisionado Parlamentario a cuestionar al Poder Judicial y al Ministerio del Interior por enviar a prisión a personas que deberían recibir tratamiento psiquiátrico u otra ayuda especializada. Envío un informe de su investigación al Parlamento y exigió que se hicieran cambios al sistema para evitar situaciones similares en el futuro. Como consecuencia de dicho informe, la Suprema Corte de Justicia inició una investigación.

El Comisionado Parlamentario presentó varios recursos de habeas corpus correctivos por distintas vulneraciones de los derechos de los reclusos que iban desde la falta de acceso a la educación o a la salud hasta condiciones inhumanas en módulos específicos.

Algunos adolescentes infractores fueron recluidos a los 17 años y estuvieron encarcelados por hasta 5 años. El MNP informó que la situación en los centros de detención de adolescentes varió mucho entre los distintos centros, lo que reflejó una falta de estándares coherentes que se apliquen a todo el sistema. Los centros de reclusión aumentaron los servicios educativos pero estos siguieron siendo insuficientes, con solo tres o cuatro horas por semana de atención para los reclusos. Las limitaciones de seguridad en los centros de reclusión en ocasiones interfirieron con las actividades educativas, recreativas y sociales para los adolescentes infractores o las eliminaron por completo. En algunos casos, los programas socioeducativos fueron escasos o precarios, o directamente no existieron.

Las condiciones físicas de las instalaciones para adolescentes fueron deficientes; incluso hubo lugares con infraestructura que se derrumbaba o que no estaban

diseñados para las actividades de rehabilitación. La alta tasa de recambio de personal y directivos en el sistema de reclusión adolescente, así como la falta de personal capacitado y especializado, también fueron motivo de preocupación.

**Administración:** Autoridades independientes llevaron adelante investigaciones de acusaciones creíbles de maltrato.

**Vigilancia independiente:** El gobierno permitió la vigilancia por parte de observadores independientes no gubernamentales, grupos locales de derechos humanos, medios de comunicación, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos internacionales. El Comisionado Parlamentario y el MNP también pudieron vigilar las cárceles.

**Mejoras:** El Instituto Nacional de Rehabilitación tomó varias medidas de emergencia para abordar deficiencias graves de infraestructura y para dar a los reclusos productos de limpieza e higiene personal, así como camas y colchones en las cárceles donde no había.

Se construyó un nuevo sector de pre-egreso en una de las cárceles más pobladas, donde había un sistema abierto por el cual los reclusos gestionaban de manera independiente un espacio personal (que incluía una cocina), con guardias civiles en lugar de guardias policiales, para tener una experiencia similar al exterior a medida que se acerca su fecha de liberación.

## **D. ARRESTO O DETENCIÓN ARBITRARIOS**

La Constitución y demás normativa en vigor prohíben las detenciones y los arrestos arbitrarios y establecen el derecho de cualquier persona a disputar la legalidad de su arresto o detención ante un juez. El gobierno, en general, respetó estos requisitos.

## **PROCEDIMIENTOS DE ARRESTO Y TRATO DE LOS DETENIDOS**

La policía detiene a sospechosos con órdenes expedidas por funcionarios debidamente autorizados. Estas personas comparecen ante un Poder Judicial independiente. Se pueden efectuar arrestos sin orden judicial cuando las personas son aprehendidas en flagrancia. El marco legal establece que los detenidos tienen derecho a una rápida decisión judicial sobre la legalidad de la detención y exige que la autoridad que hace la detención explique los motivos legales de la misma. Si el detenido no puede pagar un abogado defensor, el juzgado designa a un defensor de oficio sin costo. Los sospechosos aprehendidos deben comparecer ante un juez en un plazo de 24 horas. Si no se presentan cargos, el caso se archiva, pero la investigación puede continuar y se puede reabrir el caso si aparecen nuevas pruebas.

La posibilidad de fianza existe, pero rara vez se usa. La mayoría de las personas que enfrentaron cargos menores no fueron encarceladas. Los funcionarios permitieron a los detenidos tener rápido acceso a sus familiares. No son válidas las confesiones obtenidas por la policía antes de que el detenido comparezca ante el juez y sin un abogado presente. El fiscal dirige la investigación de cualquier denuncia del detenido por maltrato.

La Ley de Urgente Consideración aprobada en 2020 otorga a los oficiales de policía un plazo de cuatro horas para investigar un hecho antes de tener que informar a la Fiscalía. En julio, la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay envió un informe a la Suprema Corte de Justicia donde se reflejó un aumento en los casos de abuso policial en el último año. Los defensores atribuyeron el aumento a los cambios introducidos por la ley y afirmaron que el aumento de la discreción policial y, en particular, del plazo para investigar tuvieron una influencia directa en este aumento, dado que la mayoría de los casos de abuso ocurrieron en el plazo de cuatro horas otorgado por la ley, durante el cual los defensores de oficio rara vez estuvieron presentes.

En marzo, vecinos grabaron un video de tres oficiales de policía amenazando a un adolescente y obligándolo a borrar un video de su teléfono celular tras haber grabado un procedimiento policial. El video, que se viralizó, mostraba a uno de los oficiales de policía golpeando al adolescente. Se presentó una denuncia formal y los tres oficiales fueron condenados por abuso de funciones y recibieron una sentencia de cinco meses de libertad a prueba, dos años de inhabilitación especial y una multa.

**Detención preventiva:** La prisión preventiva se limita a casos de reincidencia, riesgo de fuga, delitos graves o si la persona representa un riesgo para la sociedad, sujeto a la decisión del juez. La ley establece que la prisión preventiva es obligatoria por presunto riesgo de fuga para las personas acusadas de violación, abuso sexual, rapiña, extorsión, secuestro y homicidio agravado.

## **E. DENEGACIÓN DE JUICIO PÚBLICO IMPARCIAL**

La Constitución prevé un Poder Judicial independiente y el Poder Ejecutivo en general respetó la independencia e imparcialidad judicial.

## **PROCEDIMIENTOS JUDICIALES**

La Constitución establece el derecho a un juicio justo y público y, en general, un Poder Judicial independiente hizo valer este derecho. Los acusados gozan del derecho de presunción de inocencia y de ser informados rápida y detalladamente de los cargos que se presentaron en su contra. Además, tienen derecho a tener un juicio sin demoras indebidas, a estar presentes en su juicio, a comunicarse con un

abogado de su elección (o a que se les asigne un defensor público si no pueden pagar un abogado), a tener el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, a recibir la asistencia gratuita de un intérprete, a no ser obligados a declarar o confesar su culpabilidad, a confrontar a los testigos del fiscal o la parte actora, a presentar sus propios testigos y pruebas, y a apelar su condena. No se usa el juicio por jurado, ya que los jueces deciden sobre todos los casos.

En el marco del cambio al sistema acusatorio en 2017, la Fiscalía General de la Nación pasó de someter a juicio unos 400 casos al mes en noviembre de 2017 a alcanzar un promedio de 1.540 casos al mes en 2020.

La Ley de Urgente Consideración aprobada en 2020 incluye restricciones al uso del proceso abreviado y la introducción de un nuevo proceso, que se denomina "proceso simplificado" y consiste en una solución intermedia entre el proceso abreviado y el juicio oral. Estos cambios no se aplicaron ampliamente.

### **Presos y detenidos políticos**

No hubo informes de presos o detenidos por razones políticas.

### **Procedimientos y recursos judiciales civiles**

Personas y organizaciones pueden solicitar reparaciones civiles por violaciones de los derechos humanos en los juzgados nacionales o mediante mecanismos administrativos establecidos en el marco legal. Los casos que involucran violaciones de los derechos humanos de una persona se pueden presentar a través de peticiones de personas u organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual podrá a su vez remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez podrá ordenar reparaciones civiles, incluso una compensación justa, para la persona perjudicada.

### **Apoderamiento ilícito y restitución de bienes**

El país suscribió la Declaración de Terezín de 2009, que llama a los países a hacer posible la restitución de bienes confiscados de manera indebida durante el Holocausto, dar acceso a sus archivos y mejorar la educación sobre el Holocausto y su conmemoración. No se conocieron reclamos de bienes muebles o inmuebles a nivel local y el país no cuenta con normas sobre restitución. Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) indicaron que no parecía que hubiera nadie estudiando la proveniencia de 1.670 libros que el país recibió de la organización Jewish Cultural Reconstruction. El informe que envió el Departamento de Estado al Congreso a partir de la ley Justice for Uncompensated Survivors Today (Justicia Ya para los Sobrevivientes no Compensados, conocida como Ley JUST, por su sigla en inglés), que fue publicado en julio de 2020, se puede consultar en el sitio web del

Departamento: <https://www.state.gov/reports/just-act-report-to-congress/> (sitio en inglés).

## **F. INJERENCIA ARBITRARIA O ILÍCITA EN LA PRIVACIDAD, LA FAMILIA, EL HOGAR O LA CORRESPONDENCIA**

La Constitución prohíbe estas prácticas y no hubo denuncias de que el gobierno no respetara estas prohibiciones.

## **Sección 2. Respeto de las libertades civiles**

### **A. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INCLUSIVE PARA LOS MIEMBROS DE LA PRENSA Y DE OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN**

El marco legal en vigor establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y de otros medios de comunicación, y el gobierno, en general, respetó este derecho. Una prensa independiente, un Poder Judicial eficaz y un sistema político democrático y funcional se aunaron para promover la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa.

**Leyes sobre difamación:** La difamación es un delito penal que se castiga con entre cuatro meses de prisión y tres años de penitenciaría o con una multa. No hubo denuncias de que el gobierno aplicara estas leyes para limitar los debates públicos.

#### **Libertad de acceso a Internet**

El gobierno no limitó ni interrumpió el acceso a Internet ni censuró contenido en línea. No hubo denuncias creíbles de que el gobierno controlara comunicaciones privadas en línea sin una debida orden judicial.

#### **Libertad académica y actos culturales**

No hubo restricciones del gobierno con respecto a la libertad académica o a actos culturales.

### **B. LIBERTADES DE REUNIÓN Y DE ASOCIACIÓN PACÍFICAS**

La Constitución establece las libertades de reunión y de asociación pacíficas y el gobierno, en general, respetó estos derechos.

### **C. LIBERTAD DE CULTO**

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la libertad de culto en el mundo (*International Religious Freedom Report*) en <https://www.state.gov/religiousfreedomreport/> (sitio en inglés).

## **D. LIBERTAD DE CIRCULACIÓN Y EL DERECHO A SALIR DEL PAÍS**

La Constitución establece la libertad de circulación dentro del país, viajes al exterior, emigración y repatriación, y el gobierno, en general, respetó estos derechos.

## **E. CONDICIÓN Y TRATO DE LOS DESPLAZADOS INTERNOS**

No corresponde.

## **F. PROTECCIÓN DE REFUGIADOS**

El gobierno cooperó con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para dar protección y asistencia a personas desplazadas internamente, refugiados, refugiados que retornaban al país, personas que procuraron asilo, apátridas y otras personas de interés.

**Acceso a asilo:** El marco legal prevé la concesión del estatuto de asilado o refugiado, y el gobierno ha establecido un sistema para proteger a los refugiados. A través de la Comisión de Refugiados, que decide sobre las solicitudes de asilo, el sistema da protección a los refugiados y encuentra soluciones duraderas, que incluyen el acceso a la vivienda y el sustento. Estas personas tienen libertad de movimiento durante el proceso normal de solicitud de asilo y reciben un documento de identidad temporal hasta que se completa el trámite, momento en el que reciben el documento permanente. Además, tienen derecho a acceder a los sistemas de salud y educación pública sin costo y a trabajar de manera legal. Tienen los mismos derechos y las mismas libertades que cualquier otro residente legal en el país. Una vez que se confirma su condición de refugiados, también tienen acceso a un proceso de reunificación familiar.

## **Sección 3. Libertad de participar en el proceso político**

La Constitución y el marco legal en vigor establecen el derecho de los ciudadanos a elegir su gobierno mediante elecciones regulares libres y transparentes con voto secreto que se basan en el sufragio universal e igualitario.

## **ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA**

**Elecciones recientes:** En noviembre de 2019, Luis Lacalle Pou obtuvo el mandato presidencial de cinco años en elecciones generales libres y transparentes. En las elecciones parlamentarias, ningún partido político ganó la mayoría de ninguna de las cámaras. Se requiere formar coaliciones para aprobar leyes.

**Participación de la mujer y de miembros de grupos minoritarios:** No existen normas que limiten la participación de las mujeres y de miembros de grupos minoritarios en el proceso político, pero estos grupos no participaron en la misma proporción que los hombres y los miembros de las mayorías.

La representación femenina constituyó un 19 % de la Cámara de Representantes y un 29 % de la Cámara de Senadores tras las elecciones de 2019. Según un informe publicado por la Cámara de Representantes, la participación femenina en la Cámara nunca superó el 25 % de sus integrantes, y las mujeres han presidido solo tres legislaturas desde 1830.

## Sección 4. Corrupción y falta de transparencia en el gobierno

El marco legal establece sanciones penales por corrupción a nivel oficial, y el gobierno, en general, aplicó estas normas en forma eficaz. Hubo denuncias aisladas de corrupción en el gobierno durante el año, y el gobierno las enfrentó tomando las medidas correspondientes. Las autoridades a veces no tuvieron los recursos y mecanismos de control suficientes para identificar y abordar los actos de mala conducta administrativa.

**Corrupción:** En mayo, el ex Vicepresidente Raúl Sendic fue condenado a 18 meses de prisión por abuso de funciones y peculado mientras era presidente de la petrolera estatal ANCAP. Como parte de la condena, Sendic también recibió una multa y una inhabilitación de cuatro años para ejercer cargos públicos. La jueza le dio a Sendic el beneficio de la suspensión condicional de la pena, lo que permite la eliminación de los antecedentes penales si no comete un nuevo delito en el plazo de un año.

## Sección 5. Posición del gobierno respecto de la investigación internacional y no gubernamental de supuestos abusos de los derechos humanos

Una variedad de grupos nacionales e internacionales de derechos humanos actuaron, en general, sin restricción por parte del gobierno, investigando y publicando sus hallazgos sobre casos de derechos humanos. Con frecuencia, los funcionarios del gobierno cooperaron y fueron receptivos a sus opiniones.

**Organismos gubernamentales de derechos humanos:** La INDDHH es un órgano autónomo con poderes cuasi jurisdiccionales que presenta informes al Parlamento. Está formada por un consejo de cinco miembros propuestos por organizaciones de

la sociedad civil y aprobados por dos tercios de votos del total de componentes del Parlamento. Ocupan el cargo por un período de cinco años y pueden ser reelectos una vez. La Institución se encarga de defender, promover y proteger los derechos humanos que garantizan la Constitución y el derecho internacional. Tiene seis equipos de referencia temáticos que abarcan temas de derechos humanos sobre género, temas infantiles, abusos históricos de derechos humanos, raza o etnia, medio ambiente y migrantes. La INDDHH recibe, investiga y hace recomendaciones sobre denuncias formales de abusos de derechos humanos. El MNP funciona en el ámbito de la INDDHH y se encarga de monitorear regularmente los centros de detención y hacer informes y recomendaciones. La Institución también se encarga de investigar las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron entre junio de 1968 y marzo de 1985 bajo la responsabilidad del Estado o con su anuencia. La INDDHH fue eficaz en lo que refiere a cumplir sus objetivos de derechos humanos.

El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario asesora a los legisladores sobre el cumplimiento de las normas nacionales y los convenios internacionales. También supervisa el trabajo de las instituciones que están a cargo de las cárceles del país y la reinserción social de los liberados. El Comisionado hizo un análisis profundo e independiente de la situación carcelaria y ejerció su rol de forma efectiva y constructiva.

La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia es el órgano rector que tiene como finalidad dar un enfoque de derechos humanos a las políticas públicas dentro del Poder Ejecutivo. Está dirigida por un consejo directivo compuesto del Secretario de Presidencia de la República, quien lo preside, y los ministros de relaciones exteriores, educación y cultura, interior y desarrollo social.

La Comisión Honoraria Contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación del Ministerio de Educación y Cultura analiza temas de racismo y discriminación. La Comisión incluye representantes del gobierno, religiosos y de la sociedad civil. No ha tenido asignación presupuestal desde 2010, pero recibió apoyo económico del gobierno para algunas actividades.

## Sección 6. Discriminación y abusos sociales

### MUJERES

**Violación y violencia doméstica:** El marco legal en vigor penaliza la violación de hombres o mujeres, incluida la violación a nivel conyugal, y la violencia doméstica. La normativa prevé penas de 3 a 16 años de penitenciaría para una persona que es declarada culpable de violación. Las autoridades aplicaron esta ley de manera efectiva. Las normas penalizan la violencia doméstica y prevén penas de 6 meses a

2 años de prisión por cometer un acto de violencia doméstica o hacer amenazas continuas de violencia. Los juzgados civiles resolvieron la mayoría de estos casos y, con frecuencia, los jueces en estos casos emitieron órdenes de restricción que en ocasiones fueron de difícil cumplimiento.

El gobierno siguió aplicando la ley sobre violencia basada en género, que se basa en normativa vigente sobre violencia doméstica. Dicha ley incluye la violencia física, psicológica, emocional, sexual, basada en prejuicios por la orientación sexual, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, política o mediática. También incluye el acoso sexual callejero y el femicidio. La ley busca generar un sistema de respuesta institucional y crea juzgados especializados. También establece estándares mínimos para el apoyo y la asistencia que debe brindar el gobierno, algo que incluye refugios para las víctimas y sus familiares directos. La ley busca evitar la revictimización en procedimientos sociales y legales, y busca que el proceso judicial sea más ágil. Según representantes de la sociedad civil, la ley no se estaba aplicando plenamente debido, en parte, a falta de recursos. Por ejemplo, los juzgados especializados que se crearon en la ley no se establecieron. Sin embargo, representantes de la sociedad civil reconocieron que los jueces de los juzgados no especializados aplicaron definiciones penales que están incluidas en la nueva ley. Representantes de ONG resaltaron la necesidad de que haya más formación de expertos en el área y de que se incluya la violencia basada en género en los programas de los cursos universitarios, especialmente en el sector de la salud.

El Código del Proceso Penal de 2017 introdujo cambios en los derechos de las víctimas, entre ellos, garantías y servicios durante el proceso penal y la creación de una Unidad de Víctimas y Testigos en la Fiscalía General de la Nación. Desde su creación, la Unidad concentró más del 50 % de su trabajo en víctimas de violencia basada en género. Representantes de la sociedad civil vieron esto como una mejora importante para las víctimas, que recibieron apoyo y orientación durante los procesos penales.

Una ley independiente sobre femicidio modifica los agravantes del homicidio para incluir si el delito provocó el fallecimiento de “una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal”. En la exposición de motivos de la ley se describe a la violencia basada en género como todos los actos violentos contra las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que se gestan en la desigualdad estructural entre hombres y mujeres.

El gobierno mantuvo un Observatorio de violencia basada en género para monitorear, recopilar, registrar y analizar datos sobre este tema. El gobierno capacitó a sus funcionarios sobre violencia basada en género y agresión sexual.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), algunas Jefaturas de Policía del interior, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y diferentes ONG atendieron centros donde las mujeres víctimas de violencia doméstica y sus hijos pudieron buscar refugio de forma provisoria. La sociedad civil informó que los refugios para víctimas fueron de buena calidad pero que la capacidad fue insuficiente. En agosto y setiembre, el MIDES abrió dos nuevos refugios para mujeres y niños que ofrecieron 260 cupos adicionales para que las víctimas pudieran recibir servicios del gobierno. El Ministerio también financió el alojamiento de víctimas en hoteles. El MIDES y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial gestionaron un programa que financió préstamos a 2 años para unas 100 víctimas mientras se conseguían más soluciones de vivienda permanentes. El MIDES también gestionó programas de vivienda que ofrecieron a los usuarios acceso a soluciones habitacionales mediante acuerdos con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y la Agencia Nacional de Vivienda, así como mediante soluciones habitacionales universales disponibles a la población en general, mientras siguieron recibiendo apoyo y seguimiento de expertos del MIDES. Según representantes de ONG, los servicios de primera respuesta se centraron más en dar asesoramiento que en ofrecer un seguimiento diario más cercano a las víctimas, principalmente debido a la falta de personal. Los servicios para víctimas en el interior del país fueron más escasos y de más difícil acceso, particularmente para mujeres en áreas rurales aisladas. El MIDES y la empresa telefónica estatal ANTEL mantuvieron una línea pública directa gratuita a nivel nacional para víctimas de violencia doméstica, atendida por empleados capacitados de ONG. En julio, las autoridades ampliaron el servicio para ofrecerlo las 24 horas, los 7 días de la semana. Las víctimas también pudieron hacer denuncias por Internet o en una seccional policial.

La Fiscalía General de la Nación tiene una Unidad de Género especializada que incorporó una mayor conciencia sobre el género en lo que refiere a temas judiciales, promovió el respeto por los derechos de las mujeres, luchó contra la violencia y mejoró la coordinación interinstitucional.

También hay un Consejo Nacional de Género, presidido por el Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES e integrado por representantes de 26 órganos gubernamentales y no gubernamentales, que incluyen los 12 ministerios, el Poder Judicial, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la INDDHH, académicos, la sociedad civil y otros sectores. El objeto del Consejo es incorporar la perspectiva de género en el desarrollo, la evaluación y la implementación de políticas.

**Acoso sexual:** El marco legal en vigor prohíbe el acoso sexual en el lugar de trabajo y lo castiga con multas o despido. La normativa establece lineamientos para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en relaciones entre docentes y estudiantes, y define indemnizaciones para las víctimas. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió las denuncias de acoso sexual. Sus inspectores investigaron las denuncias y el Ministerio aplicó las multas correspondientes.

**Derechos reproductivos:** No se informó sobre casos de abortos forzados o esterilización involuntaria por parte de las autoridades.

El país reconoció, protegió y promovió los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación. Sin embargo, siguió habiendo problemas para la implementación total de estas políticas, en particular en el interior del país y entre poblaciones marginadas. Los adolescentes, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, queer e intergénero (LGBTQI+), las personas con discapacidades y los afro-uruguayos sufrieron discriminación en el acceso pleno a anticonceptivos y atención médica en temas reproductivos.

El gobierno brindó acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para sobrevivientes de violencia sexual, que incluyó anticonceptivos de emergencia como parte de la atención en casos de violación.

**Discriminación:** El marco legal en vigor otorga la misma situación jurídica y los mismos derechos a hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres sufrieron discriminación en acceso al empleo, salarios, créditos, educación y vivienda, y dificultades en la concreción de emprendimientos comerciales. Según la ONU, el empleo femenino se concentró en una cantidad relativamente baja de ocupaciones y sectores específicos, entre ellos: servicios, ventas, mano de obra no calificada, trabajo doméstico, servicios sociales, servicios de salud y educación. Existen restricciones para el trabajo de las mujeres en las fábricas. Un estudio realizado en julio por Acrux Partners demostró que las mujeres tenían menos acceso a créditos, y en general por montos menores, que los hombres.

Durante el año, la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo del MTSS promovió la inclusión de cláusulas sobre igualdad de género en las negociaciones de los Consejos de Salarios, y se puso énfasis en la igualdad de remuneración para igual trabajo, la igualdad de oportunidades de acceso a puestos de trabajo más calificados y a la capacitación, la eliminación de elementos discriminatorios en los procesos de selección y promoción, y la garantía y protección legal para la maternidad y las responsabilidades compartidas.

## **VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN SISTÉMICAS POR MOTIVOS RACIALES O ÉTNICOS**

La Constitución y demás normativa prohíben la discriminación basada en raza o etnia, y el gobierno trabajó para hacer cumplir las normas. A pesar de ello, la minoría afro-uruguaya del país siguió sufriendo discriminación social, altos niveles de pobreza y niveles educativos más bajos. Según un informe del Banco Mundial de 2020, es casi dos veces más probable que los afro-uruguayos residan en asentamientos irregulares con los peores indicadores socioeconómicos que el resto de la población. En el informe también se indicó que, si bien los afro-uruguayos tenían acceso a servicios de salud, dependían más del prestador público (ASSE) que el resto de la población. Mientras que un 30 % de la población total usaba los servicios públicos de salud, entre los afro-uruguayos esa tasa era de casi un 48 %. Por otro lado, si bien un 63 % de la población total recibía servicios de salud de instituciones de asistencia médica colectivas, solo cerca de un 46 % de los afrodescendientes utilizaba estos servicios. Los afro-uruguayos tuvieron niveles más bajos de educación en general, pero la brecha era mucho mayor si se miraban los niveles de educación secundaria y superior. Algunas ONG denunciaron la existencia de “racismo estructural” en la sociedad e indicaron que el porcentaje de afro-uruguayos que trabajaron en empleos no calificados fue mucho mayor que el de miembros de otros grupos.

Los afro-uruguayos estuvieron poco representados en el gobierno. En las elecciones de octubre de 2019, fueron electos 2 representantes afro-uruguayos entre los 130 integrantes del Parlamento, entre ellos la primera persona afro-uruguaya en ser elegida para el Senado. La ley asigna el 8 % de los empleos públicos a postulantes de la minoría afro-uruguaya que cumplan los requisitos constitucionales y legales, aunque este porcentaje no se alcanzó. El Instituto Nacional de Empleo debe incluir a los afro-uruguayos en sus cursos de capacitación. La normativa requiere que todos los sistemas de becas y programas de apoyo estudiantil incluyan una cuota para afro-uruguayos, y otorga beneficios económicos a las empresas que los contraten. Sin embargo, la ONU informó que fue difícil garantizar que la perspectiva etno-racial estuviera incluida en todos los programas de becas para cubrir las cuotas.

La Escuela Nacional de Policía, la Escuela Nacional de Operaciones de Paz del Uruguay y el Instituto Artigas del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores incluyeron cursos de sensibilización acerca de la discriminación en sus mallas curriculares. El Ministerio del Interior organizó talleres para oficiales policiales de todo el país con el fin de analizar los protocolos y procedimientos policiales relativos a temas étnicos. El MIDES y la comisión interinstitucional contra la discriminación organizaron talleres de concientización para su personal.

## MENORES DE EDAD

**Inscripción de nacimientos:** La ciudadanía se obtiene por nacimiento dentro del territorio del país o a través del padre o la madre. El gobierno inscribió todos los nacimientos inmediatamente.

**Maltrato infantil:** Existen normas contra el maltrato infantil y las penas varían según el tipo de maltrato. El delito de abuso sexual de menores conlleva penas que van de los 2 años de prisión a los 16 años de penitenciaría, según la gravedad del caso. El delito de agresión conlleva penas que van de los 3 meses de prisión a los 8 años de penitenciaría, y el delito de violencia doméstica penas que van de los 6 meses a los 2 años de prisión. El INAU ofreció una línea telefónica directa gratuita en todo el país. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) y algunas ONG hicieron campañas de concientización y el SIPIAV coordinó trabajos interinstitucionales para proteger los derechos de los niños.

El Ministerio de Educación y Cultura coordinó trabajos para dar a menores víctimas de violencia doméstica herramientas para denunciar los abusos a través de sus computadoras del *Plan Ceibal*.

**Matrimonio infantil, a edad temprana y forzado:** La edad mínima legal para contraer matrimonio es 16 años, pero la ley requiere consentimiento parental hasta los 18 años. La ley define el matrimonio forzado como una forma de explotación.

**Explotación sexual de menores:** La normativa en vigor prohíbe la explotación sexual comercial de menores y la pornografía infantil. Las autoridades trabajaron para hacer cumplir la ley. En marzo, un hombre de 54 años fue condenado por el abuso sexual de dos menores de 12 y 13 años a la pena de cuatro años de penitenciaría, dividida en dos años de prisión efectiva y dos años en régimen de libertad a prueba. En junio, el Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol arrestó a un hombre que atraía a menores a través de una red social para ejecutar actos sexuales o eróticos a cambio de dinero. Fue condenado “por un delito de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo” a la pena de 24 meses de prisión (12 meses de prisión efectiva y 12 meses de libertad a prueba). El Departamento de Investigación de Delitos Especiales siguió trabajando en un programa centrado en delitos de pornografía infantil. En total, diez personas fueron arrestadas y condenadas por este delito.

La ley de trata de personas define la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas, niños o adolescentes para la explotación sexual como una forma de trata. El marco legal en vigor establece que la edad mínima para tener relaciones sexuales consensuadas es 12 años. Cuando la unión carnal es entre un adulto (persona mayor de 18 años) y un menor de menos de 15 años de edad, se presume violencia y pueden aplicarse las leyes sobre relaciones sexuales con menores, que establecen una pena de entre 2 años de prisión y 12 años de penitenciaría. Las penas por trata de personas con fines de explotación sexual van de 4 a 16 años de penitenciaría. Estas penas se incrementaron de un tercio a la mitad si el delito de trata involucraba a una víctima menor de edad. Las penas para delitos de pornografía infantil van de 1 año de prisión a 6 años de penitenciaría, y la ley se cumplió de manera eficaz. El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia siguió aplicando su plan de acción nacional para 2016-2021.

En setiembre, el Ministerio de Turismo, el INAU y UNICEF, con el apoyo de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, suscribieron un memorando de entendimiento para la prevención, la detección y el abordaje de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el sector turístico. La Fiscalía General de la Nación mantuvo una línea directa especial para recibir denuncias de explotación sexual de menores de víctimas que tuvieran alguna información al respecto.

**Menores en instituciones:** El MNP informó que hubo vulneración de los derechos en centros para niños y adolescentes con discapacidades mentales, que incluyeron maltrato físico y verbal en tres centros. Algunos centros priorizaron la seguridad, el orden y el control, y algunos no contaron con canales adecuados para denunciar casos de abuso.

También informó que se vulneraron los derechos en centros puerta de entrada, donde se envía inicialmente a los niños o adolescentes separados de sus familias para una primera respuesta y posterior diagnóstico y tratamiento. Dichas vulneraciones incluyeron estadías prolongadas, hacinamiento, condiciones de reclusión estresantes, falta de personal de apoyo necesario y maltratos.

**Sustracción internacional de menores:** El país es parte de la Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Véase el informe anual del Departamento de Estado sobre la sustracción internacional de menores por uno de sus padres (*Annual Report on International Parental Child Abduction*) en

<https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html> (sitio en inglés).

## **ANTISEMITISMO**

El Comité Central Israelita informó que la comunidad judía tenía una población estimada de entre 12.000 y 18.000 personas.

Líderes judíos denunciaron actos de antisemitismo que incluyen acoso verbal y conductas agresivas hacia personas judías. En mayo, un edil del departamento de Rocha por el Frente Amplio publicó el siguiente comentario en Facebook, en el contexto del conflicto palestino-israelí: "Todos los días de mi vida me pregunto hermana, qué tan equivocado estaba Hitler?" Recibió fuertes críticas de otros ediles, que exigieron su renuncia, y compañeros de su propio partido, que remitieron el caso al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y exigieron que se tomara licencia. Posteriormente, presentó su renuncia al cargo.

## **TRATA DE PERSONAS**

Véase el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report> (sitio en inglés).

## **PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Las personas con discapacidad no tuvieron acceso a educación, servicios de salud, edificios públicos y transporte en igualdad de condiciones que los demás. El marco legal requiere dicha igualdad de acceso, así como que la comunicación e información se presenten en formatos accesibles, pero esto no se aplicó. El marco legal prohíbe el abuso y establece la protección de los derechos de las personas con discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y mentales, e incluye el acceso a educación, empleo, servicios de salud, información, comunicaciones, edificios, transporte, el sistema judicial y otros servicios públicos. Según la INDDHH, las personas con discapacidad siguieron sufriendo abusos a sus derechos humanos. Las personas con discapacidad que vivían en centros públicos y privados estuvieron desprotegidas y fueron vulnerables por la falta de mecanismos eficaces de supervisión. De acuerdo con un informe sobre inclusión social publicado en 2020 por el Banco Mundial, las personas con discapacidad enfrentaron numerosos obstáculos para su participación en distintos sectores, especialmente en el mercado laboral, la educación y el acceso a los espacios públicos. Según el estudio, solo 450 de 1.500 ómnibus en Montevideo eran accesibles para personas con discapacidad y operaban con una frecuencia limitada y en áreas limitadas de la ciudad, lo que restringía de manera importante la movilidad de las personas con discapacidad. En el informe también se destacó la falta de datos adecuados para estudiar este problema y, por lo tanto, abordar de manera apropiada las necesidades de la comunidad de personas con discapacidad.

El gobierno no siempre hizo cumplir las disposiciones relativas a personas con discapacidad de forma eficaz. Representantes de la sociedad civil afirmaron que hubo una falta general de servicios para personas con discapacidad en el interior del país. El MIDES gestionó diversos programas que ofrecieron equipos de asistencia, soluciones de vivienda temporales, servicios de cuidados, asistencia legal y acceso a transporte, educación, formación vocacional y servicios de empleo, pero no tuvo la capacidad para alcanzar a todas las personas con discapacidad.

Los menores con discapacidad asistieron mucho menos a clases en todos los niveles educativos que los niños sin discapacidad. En el informe se indica que "si bien la tasa nacional de personas que han completado la educación primaria o menos es del 40 %, entre las personas con algún nivel de discapacidad alcanza el 57 % y llega al 72 % para aquellos con una discapacidad severa". El marco legal establece el derecho de los niños con discapacidades a educarse (a nivel de educación primaria, secundaria y terciaria). Algunas ONG informaron que algunas escuelas públicas construidas tras la aprobación de la ley que protege a las personas con discapacidad no cumplieron con los requisitos de accesibilidad y con frecuencia no tuvieron recursos para atender sus necesidades especiales. Un organismo internacional informó que todavía había "escuelas especiales" para niños con discapacidades, lo que resultaba en una situación de segregación para estos menores. Un organismo internacional también informó que hubo muy pocos adolescentes con discapacidades en la educación secundaria. Las rampas construidas en escuelas y liceos públicos facilitaron el acceso, pero algunos edificios públicos, locales comerciales, cines y otros locales culturales, así como muchas veredas, no contaron con rampas de acceso. Representantes de ONG informaron que los hospitales y otros servicios médicos no siempre fueron accesibles para pacientes con discapacidad. El personal médico en ocasiones no tuvo la capacitación para brindar atención ambulatoria a estos pacientes. El *Plan Ceibal*, un programa patrocinado por el gobierno también conocido como "One Laptop per Child" (una computadora portátil por niño), siguió ofreciendo computadoras portátiles adaptadas para niños con discapacidades. Por ley, los canales de televisión abierta deben tener interpretación simultánea en lengua de señas o subtítulos en los programas informativos y otros tipos de programas. Se cumplió con esta obligación.

## **ESTIGMA SOCIAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y EL SIDA**

Hubo denuncias aisladas de discriminación social contra personas con VIH o sida.

En agosto, una ONG local denunció que un hospital en el departamento de Paysandú no permitió que un hombre homosexual donara sangre. La denuncia fue presentada ante ASSE y la INDDHH, y generó que otras personas presentaran

varias denuncias similares. Los funcionarios del hospital se disculparon y afirmaron que se debió al desconocimiento sobre un cambio normativo de diciembre de 2020. El reglamento de medicina transfusional vigente desde 1999, que no permitía que hombres que hubieran tenido relaciones sexuales con otros hombres donaran sangre, fue derogado, y la orientación sexual dejó de considerarse un factor decisivo para determinar quién puede donar sangre.

## **ACTOS DE VIOLENCIA, CRIMINALIZACIÓN Y OTROS ABUSOS SOCIALES MOTIVADOS POR LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO**

Líderes de organizaciones de la sociedad civil informaron que, a pesar de los avances legales en temas LGBTQI+, la discriminación social se mantuvo en niveles altos. Algunas ONG también informaron que, aunque la ley establece el derecho de las personas transgénero a la terapia hormonal y a la cirugía de reasignación de sexo, hubo denuncias de que algunos proveedores de salud no les ofrecieron estas opciones a los pacientes, sin sufrir ninguna consecuencia por su incumplimiento de la ley. Además, la sociedad civil informó que la cirugía de reasignación de sexo solo estuvo disponible para las mujeres transgénero (reasignación de masculino a femenino). Algunas ONG informaron que la comisión a cargo de los cambios de nombre se vio superada por la carga de trabajo, lo que derivó en demoras. El MIDES informó que, al mes de setiembre, la comisión había recibido 148 solicitudes de cambio de nombre, de las cuales 47 habían sido aprobadas.

Las autoridades protegieron, en general, los derechos de las personas LGBTQI+. Sin embargo, según Amnistía Internacional, el país no tuvo ninguna política antidiscriminatoria integral que protegiera a los ciudadanos LGBTQI+ de violencia en escuelas y espacios públicos o estableciera su derecho a acceder a los servicios de salud.

La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) presentó un estudio en 2018 que indicó que las violaciones de los derechos humanos de las mujeres transgénero incluyeron discriminación, violencia y agresión, robo, violación al derecho a acceder a la justicia, acoso y homicidio, entre otras. La discriminación contra las mujeres transgénero habitualmente fue peor en el interior del país, que suele ser más conservador y tener menos población. REDLACTRANS informó que la mayoría de las personas transgénero no terminó la educación secundaria y que la mayoría de las mujeres transgénero trabajaron en el sector informal, donde sus beneficios sociales no siempre estuvieron garantizados. Las mujeres transgénero en general fueron más vulnerables a situaciones peligrosas e incómodas como trabajadoras sexuales y menos proclives a presentar una denuncia sobre amenazas o ataques. En 2016 (las últimas cifras disponibles) el gobierno informó que el 30 % de las personas transgénero no tenía empleo. Entre las que tenían empleo, solo el

25 % trabajaba en el sector formal, el 70 % eran trabajadores sexuales y la mayoría tenía bajos niveles educativos. La sociedad civil informó que la expulsión del hogar fue menos frecuente entre los hombres transgénero, pero esta población mostró una alta tasa de depresión e intentos de suicidio. También se indicó que, dado que no completaban la educación formal, los hombres transgénero con frecuencia trabajaron en empleos no calificados y con baja remuneración.

## Sección 7. Derechos de los trabajadores

### **A. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA**

La Constitución y demás normas en vigor protegen el derecho de los trabajadores a constituir sindicatos y afiliarse a sindicatos independientes, participar de la negociación colectiva y hacer huelgas legales. El gobierno y los empleadores respetaron la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva en la práctica. Los empleados públicos, empleados de empresas estatales, trabajadores de empresas privadas y trabajadores extranjeros legales pueden afiliarse a sindicatos. El marco legal prohíbe la discriminación sindical y exige que los empleadores vuelvan a contratar a los trabajadores despedidos por actividades sindicales, incluidos los trabajadores inmigrantes, y les paguen una indemnización. Los trabajadores del sector informal no están incluidos en estas protecciones.

La Ley de Urgente Consideración aprobada en julio de 2020 introdujo cambios que afectaron el derecho de huelga. La ley establece que los huelguistas no pueden ocupar los lugares de trabajo y evitar que los no huelguistas y la dirección de las empresas ingresen a las instalaciones. Además, la ley establece que no se permite impedir "la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público". Los sindicatos han expresado su opinión de que esto constituye una limitación al derecho de huelga. El PIT-CNT y el Frente Amplio (partido de oposición) juntaron suficientes firmas para convocar un referéndum para derogar este y otros artículos de la Ley de Urgente Consideración. Los observadores creían que la votación seguramente tendría lugar a principios de 2022.

El gobierno hizo cumplir de manera eficaz las normas laborales pertinentes, y las penas fueron acordes con las establecidas en otras leyes vinculadas a la privación de derechos civiles, como la ley contra la discriminación.

Las organizaciones de trabajadores funcionaron sin intervención gubernamental ni política. Los líderes sindicales abogaron activamente por temas relativos a políticas públicas e incluso a la política exterior, y siguieron siendo muy activos en la vida política y económica del país. En 2019, la Organización Internacional del Trabajo

incluyó a Uruguay en la lista de países sujetos a análisis por parte de su Comisión de Aplicación de Normas por no cumplir con el Convenio 98 sobre negociación colectiva. Según la Comisión, los órganos tripartitos pueden negociar solo los salarios. Los términos y las condiciones laborales se deberían negociar en un ámbito bilateral entre empleadores y organizaciones de empleados. El Convenio establece que la negociación colectiva debe ser voluntaria. Sin embargo, la forma en que la ley está redactada en Uruguay hace que sea obligatoria en la práctica. Durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2019, la Comisión solicitó que se revisara y modificara la normativa del país sobre negociación colectiva.

## **B. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO**

El marco legal prohíbe y penaliza toda forma de trabajo forzoso u obligatorio y el gobierno aplicó las normas de manera efectiva. Las normas establecen penas de 4 a 16 años de penitenciaría por delitos de trabajo forzoso. Las penas fueron acordes a las de delitos graves análogos, como el secuestro. No se dispuso de información sobre la efectividad de las inspecciones y los recursos del gobierno. Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Paraguay, Perú y Venezuela, fueron vulnerables al trabajo forzoso en agricultura, construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, pesca y procesamiento de madera. Es posible que ciudadanos cubanos que estaban trabajando en Uruguay hayan sido obligados a trabajar por el gobierno cubano. Los trabajadores domésticos empleados en el interior del país, una zona menos monitoreada, tuvieron un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas. Las mujeres inmigrantes fueron las más vulnerables, ya que con frecuencia estuvieron expuestas a explotación sexual comercial. Trabajadores extranjeros a bordo de buques pesqueros de bandera extranjera que atracan en el puerto de Montevideo o cumplen tareas en aguas jurisdiccionales uruguayas podrían haber estado sujetos a abusos que indicarían la existencia de trabajo forzado, entre ellos salarios impagos, documentos de identificación confiscados, una falta total de atención médica y odontológica, y abuso físico. Según cifras oficiales, entre 2018 y 2020, hubo 17 fallecimientos de tripulantes asociados con buques pesqueros de bandera extranjera que están atracados en el puerto de Montevideo y navegando en aguas uruguayas. Varios de estos fallecimientos se debieron a mala atención médica.

Véase también el informe del Departamento de Estado sobre la trata de personas (*Trafficking in Persons Report*) en <https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report> (sitio en inglés).

### **C. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y EDAD MÍNIMA PARA TRABAJAR**

El marco legal prohíbe las peores formas de trabajo infantil y establece una edad mínima para trabajar, limitaciones a la cantidad de horas de trabajo y restricciones de salud y seguridad ocupacional para los menores. La normativa establece que la edad mínima para trabajar es 15 años, pero esto no se aplica a todos los sectores, por ejemplo, los que implican trabajo peligroso. El INAU puede expedir permisos de trabajo para menores de 13 a 15 años de edad en las circunstancias excepcionales previstas por la ley. Los menores de 15 a 17 años deben someterse a exámenes médicos antes de comenzar a trabajar y deben renovar estos exámenes anualmente para confirmar que el trabajo realizado no supera su capacidad física. Estos menores no pueden trabajar más de 6 horas por día dentro de una semana laboral de 36 horas y no pueden trabajar entre las 22:00 y las 6:00 horas. La edad mínima para hacer trabajos peligrosos es 18 años. El gobierno lleva una lista de trabajos peligrosos o que causan fatiga que los menores no deberían realizar y para los cuales no se conceden permisos.

El MTSS es responsable de supervisar el cumplimiento general de la normativa laboral, pero el INAU es responsable de hacer cumplir las normas sobre trabajo infantil. Debido a la falta de recursos específicos, el control de cumplimiento fue variado y especialmente escaso en la economía informal, donde se dio la mayoría del trabajo infantil. Las penas fueron acordes a las de delitos graves análogos, como el secuestro, o incluso más severas. Las empresas y personas que violan las normas sobre trabajo infantil pueden recibir una multa, cuyo monto se determina mediante un índice ajustable del gobierno. Los padres de los menores involucrados en trabajo infantil ilegal pueden recibir condenas que van desde tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría de acuerdo con el Código Penal. Estas penas fueron suficientes para disuadir a las personas de violar las normas.

Las principales actividades de trabajo infantil informadas en el interior del país fueron tareas en pequeños establecimientos rurales, trabajos de mantenimiento, alimentar animales, pescar, limpiar tambos, arrear ganado y trabajar en peluquerías, en establecimientos de verano y como auxiliares de cocina. En Montevideo, las principales actividades laborales fueron en la industria alimenticia (supermercados, restaurantes de comida rápida y panaderías) y en el sector de servicios (estaciones de servicio, servicio al cliente, servicios de delivery, limpieza y actividades de auxiliar de cocina). Se siguió denunciando trabajo infantil en el sector informal, en actividades como la mendicidad, el servicio doméstico, la venta ambulante, la recolección de residuos y el reciclado, la construcción, la agricultura y la silvicultura, áreas en general reguladas en forma menos estricta y en las que los niños frecuentemente trabajaron con sus familias.

El INAU trabajó con el MTSS y el Banco de Seguros del Estado (empresa estatal de seguros) para investigar las denuncias de trabajo infantil, y trabajó con la Fiscalía General de la Nación para llevar los casos a la justicia. Según el INAU, se estima que hubo unos 60.000 niños y adolescentes trabajando en actividades informales e ilegales. Autoridades del INAU y del MTSS afirmaron que es probable que la situación de trabajo infantil haya empeorado por los efectos de la pandemia y anunciaron medidas para abordar este problema, que incluyen contratar más inspectores dedicados a detectar el trabajo infantil (lo que aumentaría su número de 7 a 12) y actualizar estadísticas sobre el tema, ya que las últimas cifras son de 2010.

Véase también el informe del Departamento de Trabajo *Conclusiones sobre las peores formas de trabajo infantil (Findings on the Worst Forms of Child Labor)* en [www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings](http://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings) (sitio en inglés).

#### **D. DISCRIMINACIÓN CON RESPECTO AL EMPLEO O LA OCUPACIÓN**

Las leyes y otras normas laborales prohíben la discriminación en lo que refiere a empleo y ocupación basada en raza, color de piel, género, religión, opinión política, nacionalidad o ciudadanía, origen social, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, edad, lengua, o condición de VIH positivo o de portador de otras enfermedades contagiosas. El gobierno en general aplicó las leyes y demás normas pertinentes, y las penas fueron suficientes para disuadir a las personas de violar dichas normas. La Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del MTSS investiga las denuncias de discriminación y abuso laboral presentadas por miembros de sindicatos.

La discriminación en el empleo y la ocupación se dio mayormente en relación con el género, la raza, la discapacidad, la identidad de género y la nacionalidad. Según ONU Mujeres, la cantidad de mujeres con empleos remunerados disminuyó a medida que tenían más hijos, algo que no sucedió con los hombres. Las mujeres recibieron salarios inferiores a los de sus homólogos masculinos (en promedio un 25 % menos en circunstancias laborales similares), y solo un 20 % de las empresas aproximadamente afirmaron tener mujeres en cargos de liderazgo. De acuerdo con un estudio publicado por la CEPAL y ONU Mujeres en 2020, 10 años después de tener su primer hijo, los salarios de las mujeres fueron en promedio 42 % menores que los de las mujeres en circunstancias similares que no tenían hijos.

Según un informe sobre inclusión social publicado por el Banco Mundial en 2020, los afro-uruguayos ganaban un 20 % menos que el resto de la población por hacer el mismo trabajo. Las mujeres afro-uruguayas tenían la tasa de desempleo más

alta, que llegaba al 14 %, si se comparaba con el 8 % de la población general. La ley requiere que el 8 % de los cargos públicos se ocupen con afro-uruguayos. La Oficina Nacional del Servicio Civil supervisa el cumplimiento de la cuota de empleo para afro-uruguayos y otros grupos, y envía informes al Parlamento. Dicha oficina indicó que en 2019 el porcentaje de llamados para cargos a ser ocupados por postulantes afro-uruguayos había alcanzado el 8 % requerido por ley por primera vez en la historia. La oficina informó que, en 2020, menos del 0,7 % de los cargos estaban ocupados por afro-uruguayos.

En el informe del Banco Mundial de 2020 también se indicó que la participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral alcanzó el 59 %, en comparación con el 76 % de las personas que no tenían discapacidades. La ley establece una cuota del 4 % para contrataciones en el sector público y privado. Según informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil de Presidencia, solo el 0,4 % de las vacantes de la administración pública durante 2020 se llenaron con personas con discapacidad. Además, el informe indicó que las personas transgénero, en particular los hombres transgénero, tuvieron los peores indicadores de empleo de toda la población. Solo el 66 % de la población transgénero estaba empleada. La tasa de desempleo fue del 30 % entre las mujeres transgénero y del 43 % entre los hombres transgénero. Entre aquellos que sí tenían empleo, aproximadamente un tercio eran trabajadores sexuales. La ley integral para personas trans fija una cuota de empleo del 1 % para personas transgénero en el sector público, pero la Oficina Nacional del Servicio Civil informó que solo el 0,016 % de las contrataciones para el servicio civil de 2020 correspondieron a personas transgénero. En 2020, el MIDES implementó un programa de empleo para ofrecer trabajo a término a personas desempleadas y, de los 3.106 beneficiarios, 61 (2 %) fueron transgénero.

Los trabajadores extranjeros, sin importar su nacionalidad o ciudadanía, no siempre fueron bienvenidos y siguieron enfrentando obstáculos al buscar empleo. La Organización Internacional para las Migraciones informó que varios trabajadores extranjeros fueron retirados de cargos que involucraban interacción cara a cara con clientes debido a quejas sobre sus acentos extranjeros. El gobierno tomó medidas para evitar y eliminar la discriminación (ver secciones 5 y 6).

## **E. CONDICIONES DE TRABAJO ACEPTABLES**

**Leyes sobre salarios y jornadas laborales:** La ley establece un salario mínimo nacional y el salario mínimo mensual para todos los trabajadores estuvo por encima de la línea de pobreza. El gobierno aplicó eficazmente las normas relativas a salarios, y las penas fueron acordes con las establecidas para delitos similares, como el fraude. Los trabajadores del sector formal (incluso los del servicio

doméstico, los trabajadores inmigrantes y los del sector agrícola) están amparados por leyes sobre salario mínimo y jornadas laborales.

La ley establece que las personas no pueden trabajar más de 8 horas al día y que la semana laboral estándar para quienes trabajan en los sectores industrial y minorista no puede superar las 44 o 48 horas con entre media hora y dos horas y media de descanso al día. La ley requiere que los empleados reciban el pago de una prima por horas trabajadas adicionalmente al horario normal de trabajo. La ley otorga a todos los trabajadores el derecho a 20 días de licencia paga después de cumplir un año de trabajo y el derecho a licencia anual paga. Asimismo, prohíbe las horas extras obligatorias que superen el máximo de 50 horas de trabajo por semana. Los empleadores del sector industrial deben dar los domingos libres a los trabajadores o un día cada seis días de trabajo (horario rotativo). Los trabajadores del sector minorista tienen derecho a un bloque de 36 horas libres por semana. Los trabajadores del sector rural no pueden trabajar más de 48 horas en un período de 6 días.

El MTSS es el responsable de hacer cumplir el salario mínimo mensual para empleados del sector público y privado, así como la legislación que regula las condiciones de salud y seguridad. El ministerio tuvo 120 inspectores de trabajo en todo el país, lo que fue suficiente para controlar el cumplimiento de las normas. No se tuvo acceso a la cantidad de sanciones impuestas por violaciones de normas laborales.

El gobierno supervisa los salarios y otros beneficios, tales como la seguridad social y el seguro médico, a través del Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva. La División de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública es responsable de la elaboración de políticas para detectar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo que pueden afectar la salud de los trabajadores.

Además, el MTSS y el Banco de Previsión Social supervisan el trabajo doméstico y pueden obtener autorización judicial para llevar a cabo inspecciones en los hogares (a veces sin notificación previa), investigar posibles violaciones de la legislación laboral y aplicar sanciones de ser necesario. Las condiciones laborales de los trabajadores domésticos incluyen sus derechos laborales, beneficios de seguridad social, aumentos salariales y beneficios de seguros.

**Seguridad y salud en el trabajo:** Por ley, los trabajadores no podrán ser expuestos a situaciones que amenacen su salud o seguridad y podrán interrumpir su trabajo si se encuentran en dichas situaciones sin poner en riesgo su empleo. Las autoridades del gobierno y los sindicatos protegieron a los empleados que

interrumpieron sus tareas en dichas condiciones. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el encargado de llevar a cabo inspecciones de salud y seguridad ocupacional en el sector agrícola.

El MTSS establece normas de salud y seguridad ocupacional que están vigentes y son adecuadas para las principales industrias del país. El gobierno hizo cumplir estas normas de manera efectiva. Las penas para las violaciones de las normas de salud y seguridad ocupacional fueron acordes a las de delitos similares, como la negligencia.

En algunos casos, los trabajadores no fueron informados sobre peligros específicos o los empleadores no hicieron cumplir adecuadamente las medidas de seguridad laboral.

**Sector informal:** Las leyes sobre salario mínimo no amparan a los trabajadores del sector informal, que representaron un 24 % de la fuerza laboral. Los trabajadores de los sectores de la construcción y agrícola fueron más vulnerables a violaciones al derecho laboral. Las normas sobre salario mínimo fueron, en general, aplicadas de manera efectiva por las autoridades en el sector formal, pero en menor grado en el sector informal. Aunque aproximadamente el 39 % de los trabajadores domésticos estuvieron empleados en el sector informal, esto representa la mitad del porcentaje de hace 10 años. La falta de conocimiento sobre sus derechos por parte de los trabajadores informales, sumada a su baja visibilidad para el Estado, llevó a que tuvieran menos protecciones.